

Medellín, quince (15) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Proceso	EJECUTIVO SINGULAR
Radicado	05001 31 03 006 2019 00014 01
Demandante	GRUPO EMPRESARIAL T&M S.A.S.
Demandado	GUSTAVO ADOLFO BEDOYA GÓMEZ
Juzgado Origen	SEXTO CIVIL CIRCUITO MEDELLÍN

Decide la Sala la apelación de la sentencia en el proceso de la referencia.

1. ANTECEDENTES.

1.1 DEMANDA¹.

Pretende la sociedad demandante la ejecución para el pago de \$394'600.000 por concepto de capital, más los intereses moratorios desde el primero de julio de 2016 hasta el pago total de la obligación.

Expuso que el demandado se constituyó deudor de Ricardo Ávila Restrepo por la suma señalada, para el efecto, el 12 de octubre de 2015 suscribió la letra de cambio No 001 y el 17 de diciembre de 2018 el acreedor endosó en propiedad la letra de cambio a la sociedad demandante y; que se estipuló como fecha de vencimiento el primero de julio de 2016, no obstante, a la fecha de presentación de la demanda el deudor no había pagado suma alguna por concepto de capital ni intereses.

1.2 CONTESTACIÓN².

El demandado negó los hechos y formuló como excepciones de mérito las que denominó:

- “[A]usencia o violación de instrucciones”, toda vez que el deudor firmó el título valor en blanco y se llenó con posterioridad sin tener ninguna instrucción verbal o escrita.
- “[M]ala fe”, pues al comparar esta demanda con la presentada en 2016, que terminó por desistimiento de las pretensiones, se puede advertir que fueron presentadas por el mismo bufete de abogados, ya que hay una misma dirección de notificación y correo electrónico, igual estilo tipográfico y la letra que diligenció ambos títulos valores es la misma, por tanto, el beneficiario del título no es desconocedor de los hechos descritos.

¹ Ver carpeta 04. EXPEDIENTE REMITIDO NUEVAMENTE POR EL JUZGADO / archivo “02-ApelaciónExpedienteFísico 1” páginas 10 y 11.

² Ibíd. páginas 70 - 74

- “[O]rigen del negocio causal”, por cuanto la letra pertenecía a un paquete de títulos que el girador intentó cobrar en acción ejecutiva ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, que terminó por desistimiento y el girador nunca celebró negocio jurídico con el demandado que originara la suscripción de la letra de cambio. Aseguró que los apoderados de la demandante conocían el proceso ejecutivo previo y acuden a una maniobra maliciosa para impedir que prosperen excepciones que solamente se pueden dirigir contra el girador del título valor.

1.3 PRIMERA INSTANCIA³.

Mediante sentencia del 19 de agosto de 2020, el juzgado declaró la prosperidad de las excepciones, cesó la ejecución y condenó en costas a la parte demandante.

Como razón de la decisión consideró que el título valor base de la ejecución no cumplía las exigencias previstas en los artículos 619 y 671 del Código de Comercio y que se acreditaron circunstancias que atacaban la validez, veracidad, vigencia y presunción de ejecutabilidad del instrumento.

Para llegar a esa determinación, sostuvo que, en lo relativo a la forma en que se llenó el título valor, debía acudir a la declaración rendida por Ricardo Ávila, quien manifestó que no fue acreedor de la obligación, sino que fungió como mero intermediario en la consecución de unos dineros para un préstamo en favor del señor Gustavo Bedoya y que los prestó una persona completamente diferente a él, que no entregó a la endosataria documento anexo al título valor y que el endoso en propiedad se efectuó en 2016.

Manifestaciones que en criterio del *a quo* riñen con la literalidad del instrumento, pues se plasmó que la obligación fue contraída el 12 de octubre de 2015, que el plazo para el cumplimiento de la obligación sería el 1° de julio de 2016, que el endoso en propiedad se realizó el 17 de diciembre de 2018 y que el acreedor de la obligación en ese lapso sería Ricardo Ávila.

También destacó que Ricardo Ávila afirmó que la letra de cambio se entregó con espacios llenos al momento de hacer el endoso, cuestión que discrepaba de las conclusiones del dictamen pericial, puesto que el experto determinó que el llenado de la letra de cambio había sido realizado por Sergio Alejandro Arango, por cuanto las grafías plasmadas

³ Ver ruta carpeta 01. EXPEDIENTE DIGITAL REMITIDO POR EL JUZGADO / archivos 04-AudienciaFallo2 y 02-ActaAudiencia

en el instrumento derivaban del mismo del tipo de letra que la persona utiliza en su mecanismo escritural corriente. Además, estableció que el tipo de tinta utilizado en el reverso como en el anverso del título concerniente a las condiciones de la obligación y al endoso correspondían a un mismo tipo de bolígrafo, estimación a la que arribó a través de la utilización de medio técnico objetivo, esto es, un filtro que usa la ciencia de la grafología. Dictamen pericial al cual le otorgó plena validez.

Expuso que el señor Dávila dijo no haber entregado ningún documento anexo al título valor y que, por tanto, no se dejaron instrucciones para su llenado, asunto que no se acreditó con ningún medio de prueba y que le brindaba credibilidad al dictamen pericial al determinar que el título valor habría sido llenado por Sergio Alejandro Arango para la época del presunto endoso. Señaló que tal circunstancia discordaba de las condiciones de la obligación a ejecutar y de la exigencia legal establecida en el artículo 622 del Código de Comercio, pues se requería una carta de instrucciones para el llenado según las instrucciones impartidas por el deudor, luego, no se podía considerar a la demandante como acreedora de buena fe.

Puntualizó no acoger el argumento expuesto por la demandante consistente en que el título valor conservaba validez por la ley de circulación y que no era dable la formulación de excepciones personales al tenedor de buena fe, pues existían diversos pronunciamientos de este Tribunal y de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que respaldan la formulación.

Finalmente, coligió que las circunstancias del negocio jurídico causal que reportó Ricardo Ávila Restrepo, no esclarecía las condiciones que aparecían contenidas en el título valor como presunta obligación a ejecutar y que no se otorgó adecuadamente el instrumento cambiario, razones por las cuales prosperarían las excepciones planteadas, en consecuencia, se imponía la cesación de la ejecución.

1.4 TRÁMITE DE LA APELACIÓN.

La sentencia de primera instancia fue proferida en audiencia y notificada en estrados, inmediatamente fue apelada por la demandante quien presentó los reparos concretos por escrito dentro de los tres días siguientes a su finalización. La alzada fue admitida mediante auto del 25 de febrero de 2021.

Considerando el actual estado de emergencia sanitaria, se dio aplicación al artículo 14 del Decreto Legislativo 806 de 2020⁴, concediéndole al apelante la oportunidad para sustentar el recurso y a la contraparte para la réplica, derecho del cual solo hizo uso la recurrente.

2. CONTROL DE LEGALIDAD Y COMPETENCIA DEL SUPERIOR.

En atención a lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 42 y en el artículo 132 del Código General del Proceso, se aprecian reunidos los presupuestos procesales para emitir sentencia porque se verificó la demanda en forma y su trámite adecuado, la competencia del juez, la capacidad para ser parte y acudir al proceso respecto de los extremos del litigio y, no se advierten vicios ni irregularidades que configuren nulidad.

Por disposición del artículo 328 de la misma obra, salvo decisiones que se deban adoptar de oficio, esta Sala limita el análisis a los reparos concretos efectuados por la parte apelante en contra de la decisión de primera instancia.

3. REPAROS CONCRETOS.

Con el propósito de que se revoque la decisión de primera instancia y se ordene seguir adelante con la ejecución, la parte actora formuló los siguientes motivos de inconformidad, con base en los cuales se establece el problema jurídico objeto de estudio.

3.1 Error en la práctica del dictamen pericial

Recriminó que el juez fundara la decisión en el dictamen pericial, pues el perito se valió de una consideración subjetiva, es decir, presumió que la caligrafía obrante en el título valor pertenecía a Sergio Alejandro Arango, a quien nunca le realizó una prueba de trazos ni validó la caligrafía del mismo.

⁴ Mediante la Ley 2213 de 2022, se acogieron como legislación permanente las disposiciones de dicho decreto para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales. La ley conserva en el artículo 12 la disposición del artículo 14 del decreto en cuanto al trámite de la apelación de sentencias en materia civil y familia.

3.2 No se acreditó la mala fe del demandante

Sostuvo que no se probó la mala fe del demandante, pues no se acreditó que recibió la letra de cambio con espacios en blanco o que éste los llenó, excepción que, supone efectos *inter partes* y no contra terceros de buena fe, el ejecutante recibió la letra de cambio llena y de acuerdo con la ley de circulación, luego, no le es oponible las consideraciones frente al negocio jurídico que dio origen al título valor.

Añadió que, no existió oposición en cuanto a que el título valor fue firmado por el demandado y se demostró por qué Ricardo Ávila tenía el instrumento, lo que sugiere la existencia de un negocio recíproco.

3.3 Problemas Jurídicos.

Conforme a lo expuesto, le corresponde a la Sala determinar:

- a) ¿Se probó que el demandante no es tenedor de buena fe exenta de culpa y, por tanto, le resultan oponibles las excepciones que cuestionan la existencia del negocio jurídico causal?
- b) De responder afirmativamente, se determinará si la falta de verificación de los trazos del endosatario en la prueba grafológica es suficiente para revocar la decisión de primer grado ordenando continuar la ejecución o, si resultó acertada la decisión de primera instancia al determinar que, la valoración conjunta de las pruebas permite concluir la inexistencia del negocio causal y ello impone la cesación de la ejecución.

4. FUNDAMENTO JURÍDICO.

4.1 Excepciones derivadas del negocio causal contra el tenedor de buena fe exenta de culpa.

El artículo 784 del Código de Comercio consagra las excepciones que pueden proponerse contra la acción cambiaria, específicamente, el numeral 12 señala que lo serán "*las derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título, contra el demandante que haya sido parte en el respectivo negocio o contra cualquier otro demandante que no sea tenedor de buena fe exenta de culpa*".

De manera que, si el ejecutante hizo parte del negocio jurídico que dio origen a la creación del título, la norma autoriza al deudor a fundar su defensa en las excepciones que deriven del mismo y protege al endosatario de buena fe exenta de culpa de tal oposición, asunto en el que cobran relevancia los principios de literalidad, incorporación y autonomía

establecidos en la ley comercial para los títulos valores. Sobre el particular, ha dicho la Corte Constitucional:

*"es importante recabar en la causal de oposición a la acción cambiaria derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título. Este mecanismo de defensa del deudor cambiario se aplica de forma excepcional, puesto que afecta las condiciones de literalidad, incorporación y autonomía del título valor, basada en la existencia de convenciones extracartulares entre el titular y el deudor, las cuales enervan la posibilidad de exigir la obligación, en los términos del artículo 782 del Código de Comercio"*⁵.

Ahora bien, la inoponibilidad de la excepción derivada del negocio causal se encuentra prevista también en favor del tenedor de buena fe exenta de culpa.

La buena fe es un mandato constitucional general, la buena fe simple es un principio y forma de conducta que difiere de la cualificada o exenta de culpa, sobre la cual ha precisado la Corte Suprema de Justicia:

*"... Es la misma buena fe simple pero acompañada de una conducta objetiva externa que ofrece certeza jurídica, así sea aparente, porque se funda en la creencia invencible de que no se está incurriendo en culpa o fraude; no obstante, **esta acompañada de un comportamiento diligente** y, por estas razones, también es conocida como la teoría de apariencia de derechos, por virtud de la cual lo irreal se transforma en real, simbólicamente, generando efectos jurídicos ante los asociados, pero merced a la ejecución de actos positivos.*

*Esta modalidad va más allá de la buena fe simple, puesto que **debe acompañarse de actividades que la transformen y permitan atribuirle el predicado de calificada, porque la persona debe cerciorarse de que su comportamiento corresponde a la verdad y se ajusta al ordenamiento**; de ahí que, por esa otra circunstancia, sea fuente creadora de derecho así este edificada en el error o en la apariencia, motivo por el cual, se itera, es el fundamento del principio error communis facit ius"*⁶ (Negrilla fuera del texto).

La buena fe exenta de culpa exige una conducta positiva, cuidadosa y diligente. Doctrina autorizada en la materia ha sostenido:

⁵ Corte Constitucional, Sentencia T-310/2009

⁶ Sentencia SC4158/2021. MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

*"... cuando se requiere que la buena fe sea exenta de culpa para que el sujeto que posee un título adquiera el amparo de la ley frente al demandado, es porque ese tenedor no puede acogerse a una mera actitud pasiva. Debe, en consecuencia, probar en cierta forma, su buena fe. **Que obró con prudencia, con diligencia, con el cuidado de una persona avisada. Que no tuvo malicia, sí, pero que también se preocupó por establecer debidamente, como persona vigilante, que no existiera error, mala fe de su tradente, algo sospechoso en el hecho o contrato efectuado. En suma, todo un cúmulo de exigencias que realcen una actitud positiva**"*⁷ (Negrilla fuera del texto).

Concluida la ausencia de buena fe exenta de culpa, la carga de la prueba para la prosperidad de la excepción fundada en el negocio jurídico causal le incumbe al deudor. En lo concerniente, sostuvo la Corte Constitucional:

*"... si el deudor opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá probar (i) las características particulares del mismo; y (ii) **las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo y la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor.** Como se indicó en el fundamento jurídico 15 de esta decisión, los principios de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación y la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación. En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción"*⁸ (Negrilla fuera del texto).

Conforme lo anterior, cuando el deudor formula una excepción personal derivada de las condiciones del negocio jurídico subyacente, aquel corre con la ineludible carga de acreditar suficientemente los términos de la negociación, y su vinculación al instrumento cambiario⁹, en cuyo ejercicio, deberá valorarse si la afectación es de tal trascendencia que inhibe la

⁷ Trujillo Calle, Bernardo, Títulos Valores, págs. 726 y 727

⁸ Sentencia T – 310/2009

⁹ En relación a ello, el artículo 835 del Código de Comercio prevé:

"ARTÍCULO 835. <PRESUNCIÓN DE BUENA FE>. Se presumirá la buena fe, aún la exenta de culpa. Quien alegue la mala fe o la culpa de una persona, o afirme que ésta conoció o debió conocer determinado hecho, deberá probarlo".

exigibilidad del título, pues de lo contrario habría de acogerse su tenor literal.

5. CASO CONCRETO.

Se tiene probado que la demanda se acompañó de la letra de cambio No 001, cuyo tenor literal revela que fue creada el 12 de octubre de 2015, que quien concurre como demandado la suscribió con el objeto de pagar el día 1° de julio de 2016 la suma de \$394'600.000 al señor Ricardo Ávila Restrepo, quien el 17 de diciembre de 2018 la endosó en propiedad a la sociedad Grupo Empresarial T&M S.A.S., cuyo representante legal, en igual fecha, endosó en procuración a la abogada demandante¹⁰.

Conforme a lo anterior, la demandante allegó documento que reúne los requisitos comunes y particulares que estatuye el Código de Comercio en los artículos 621 y 671, por consiguiente, alcanza la calidad de letra de cambio como título valor, contiene obligación cambiaria que deriva su eficacia de la firma del obligado y de su entrega con el fin de hacerla negociable, según la ley de circulación de rige a los títulos valores (art. 625 ib.) y, en principio, resulta idónea para pretenderse por la vía ejecutiva, según lo dispuesto en el artículo 422 del Código General del Proceso.

5.1 Oponibilidad al endosatario de la excepción derivada del negocio causal.

El demandado al ejercer el derecho de defensa desconoció el negocio jurídico que le dio origen a la letra de cambio. Señaló que, si bien firmó 10 letras de cambio en blanco, ello obedeció a la garantía de un préstamo de dinero que pretendía realizar con el señor Oscar del Hierro Becerra, del cual no recibió ninguna suma; que previamente se intentó el cobro mediante un proceso ejecutivo adelantado ante el Juzgado Quinto Civil Circuito de esta ciudad, el cual terminó por desistimiento de las pretensiones y; que no suscribió ninguna letra de cambio a favor de Ricardo Ávila Restrepo, el título valor base de recaudo no fue diligenciado en su presencia, mucho menos entregó instrucción para llenarlo. Así, formuló excepción de mérito mediante la cual cuestiona la existencia del negocio causal.

En ese escenario, la Sala abordará el estudio del primer problema jurídico planteado, a fin de establecer de cara a los reproches del apelante, si la sociedad demandante ostenta la calidad de tenedor de buena fe exenta de culpa para determinar si le es o no oponible la excepción derivada del negocio jurídico que dio origen a la creación y transferencia del título.

¹⁰ Ver ruta carpeta 04. EXPEDIENTE REMITIDO NUEVAMENTE POR EL JUZGADO / archivo 02-ApelaciónExpedienteFisico 1 página 12; carpeta 02-ApelacionExpedienteFisico05AnexosFaltantes / archivo ReversoLetraCambio

Sobre ese punto, es necesario precisar que en materia cambiaria la buena fe se presume y, de contera, quien alega la mala fe debe probarla, conforme lo dispone el artículo 835 del Código de Comercio. De manera que el tenedor es considerado como tercero de buena fe exenta de culpa y se presume que fue cuidadoso en la adquisición del título "(...) *que su posición de tenedor es intachable. De allí que, si alguien alega su mala fe, o la culpa suya en la adquisición de un título vicioso o de persona que no era dueña, o que conoció o debió conocer determinado hecho en relación con su derecho de tenedor, deberá probarlo*"¹¹.

En el caso concreto, encuentra la Sala que tal presunción no se mantuvo, pues logró demostrarse que la sociedad demandante no observó una conducta positiva, prudente, cuidadosa y diligente en la obtención del conocimiento de hechos trascendentales de cara a las condiciones de la obligación plasmada en el título valor, desvirtuándose así, la presunción legal que la estima como tenedora de buena fe exenta de culpa.

En efecto, llama la atención de la Sala el desconocimiento que se revela desde la misma presentación de la demanda respecto de la calidad en que fungió el señor Ricardo Ávila Restrepo, concretamente, se manifestó en el hecho primero: ***"El demandado, señor GUSTAVO ADOLFO BEDOYA GÓMEZ se constituyó deudor del señor RICARDO ÁVILA"***, condición que no ostentó el endosante, quien fue citado al proceso de ejecución y aceptó que su intervención en el negocio que dio origen a la letra de cambio no fue la de acreedor, sino que obedeció una intermediación que realizó entre el deudor Gustavo Adolfo Bedoya Gómez y un tercero que no figura en el documento cartular, quien prestó la suma de dinero contenida en el título. Explicó: *"El me llama me dice consígame un dinero prestado por un tiempo muy cortico, le dije no hay problema yo tengo gente conocida, a mí me da una comisión y yo lo consigo, eso fue lo que hice yo"*.

Al indagar sobre la negociación efectuada con la sociedad demandante señaló: *"El señor que prestó el dinero ya lo estaba reclamando entonces viendo yo la circunstancia, el señor necesitaba una maquina entonces yo accedí a entregarle la máquina, yo se la compro a T&M y les expongo que tengo la letra en garantía en pago de la retro ellos me la entregan y yo se la entrego al señor Libardo"*.

La condición en la cual fungía quien transfirió el título valor por endoso es un aspecto trascendental que debió conocer el representante legal de la sociedad demandante, sin embargo, desde la presentación del escrito inicial se muestra que no se efectuaron labores mínimas tendientes a obtener certeza de que las sumas de dinero contenidas en el título, en realidad se le adeudaban al señor Ávila, asunto que debía interesarle a la

¹¹ Trujillo Calle Bernardo, "De los títulos valores". Parte General. Tomo I. Undécima edición. Editorial Leyer.

entidad ejecutante, pues según el señor Dávila la letra de cambio constituyó medio de pago de una retroexcavadora vendida por dicha empresa, luego era razonable indagar por las condiciones para la efectividad del recaudo de la suma adeudada, pues se trata de una suma significativa de dinero incluso para la persona jurídica ejecutante, pues el valor en cobro excede el triple del capital autorizado, suscrito y pagado que registra la sociedad en su certificado de existencia y representación legal, donde se indica que corresponde a \$100'000.000¹².

Recuérdese que, a voces del artículo 23 de la Ley 222 de 1995: "*los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad*", y no resulta un comportamiento diligente que consulte los intereses de una persona jurídica, la admisión de un título valor por un valor superior al capital de la misma, sin que se realice una labor mínima de averiguación sobre las condiciones del negocio jurídico causal del instrumento, particularmente, cerciorarse sobre la calidad del acreedor primigenio y quien lo transfiere en endoso en aras de verificar un recaudo efectivo del crédito. El desconocimiento en ese punto advierte una actitud pasiva que escapa de la órbita de diligencia que exige el ordenamiento jurídico de un buen hombre de negocios.

No desconoce la Sala el ámbito de protección que otorga la ley comercial a quien adquiere un título valor como tenedor de buena fe excluyendo como oposición la excepción que derive del negocio subyacente en virtud de los principios que rigen la materia y la ley de circulación que le es propia a los instrumentos cambiarios, sin embargo, no puede perderse de vista que, esa buena fe que ampara la norma no corresponde a la simple que se ubica en el campo de la lealtad y la conciencia, sino a la cualificada que exige un elemento objetivo, esto es, además de la conciencia exige certeza y la conducta de una persona avisada, cuidadosa, diligente y vigilante que, no se advierte en el actuar de la ejecutante.

Conducta que es más exigente en tratándose del administrador de una persona jurídica, pues el mismo ordenamiento jurídico le impone el deber de obrar como un buen hombre de negocios, quien, en lo particular, debió preocuparse por establecer cuidadosamente que no existiera error respecto del contenido plasmado en el documento cartular que se aceptaba como medio de pago, más aún cuando la suma a recaudar resultaba ser muy superior al capital de la sociedad.

El desconocimiento de circunstancias como la calidad en la cual fungía Ricardo Ávila, denota falta de diligencia de la demandante en realizar averiguaciones de aspectos trascendentales, a pesar de que serían en su

¹² Ver archivo 02-ApelaciónExpedienteFísico 1 página 6

propio beneficio los resultados de la misma para adquirir no solo certidumbre en relación con la existencia del derecho que se incorpora en el título que se adquiriría por endoso, sino para verificar la efectividad del recaudo, de forma que, no es dable calificar a la endosataria en propiedad como tenedora de buena fe exenta de culpa.

En síntesis, la ejecutante no desplegó ninguna averiguación, su desconocimiento de aspecto relevantes como la calidad de quien reporta el título como acreedor de una cuantiosa suma de dinero desvirtúa la calidad de tenedor de buena fe exenta de culpa en que pretende escudarse el apelante, pues debió indagar diligentemente a qué obedecía el negocio causal o al menos el respaldo económico del deudor, su conducta en la transferencia del título valor debía ser la de un buen hombre de negocios y no lo hizo, no quedando entonces más remedio que dar paso al estudio de la excepción relacionada con el negocio subyacente.

5.2. La excepción derivada del negocio causal y su incidencia en la continuidad de la ejecución.

La parte demandada reconoció en la contestación de la demanda haber firmado 10 letras de cambio con espacios en blanco. No obstante, aseguró que el negocio jurídico subyacente correspondió a un préstamo que le realizaría Oscar del Hierro y que dicho préstamo nunca se materializó. Añadió que no suscribió ninguna letra de cambio a favor de Ricardo Ávila Restrepo y que el título valor base de recaudo no fue diligenciado en su presencia, mucho menos entregó instrucciones para completarlo y formuló la excepción que cuestiona la existencia del negocio jurídico causal que dio origen a la letra de cambio que soporta la acción cambiaria.

Corresponde al Tribunal determinar si la valoración conjunta de las pruebas permite confirmar la tesis que defiende la parte demandada, a saber, la inexistencia de una obligación causal cierta y ello tiene la virtualidad derruir la exigibilidad del título.

La tesis que sostendrá la Sala es que la valoración probatoria permite determinar que existen circunstancias significativas y contundentes que generan dudas razonables sobre la existencia de un negocio causal real y subyacente que armonice con el contenido del documento cartular, lo cual afecta la exigibilidad de la obligación al punto de impedir la continuidad de la ejecución.

Ciertamente, las pruebas revelan divergencias en aspectos como el acreedor primigenio de la obligación, la fecha en que se efectuó el endoso en propiedad e, inclusive, hay indefinición en relación al otorgamiento del instrumento cambiario, es decir, no se puede establecer certeramente si

se otorgó o no con espacios en blanco y si fueron dejadas instrucciones por el deudor para su llenado.

El señor Ricardo Ávila Restrepo que figura en el instrumento como acreedor primigenio de la obligación, se vinculó al proceso de ejecución y al rendir declaración aclaró no poseer tal condición en la relación negocial, que su rol fue de intermediario entre el deudor y un tercero que realizó el préstamo percibiendo una comisión. En relación al negocio causal depuso:

"La letra de cambio el señor Gustavo me la envió en garantía de la plata que se le consiguió prestada a él, viendo las circunstancia que Gustavo estaba incumpliendo al señor que se le buscó la plata prestada, yo cogí una maquina una retro y se la entregué al señor que prestó la plata y les puse en garantía la letra a la empresa T&M".

Sumado a ello, se le preguntó al declarante la época en la cual hizo la negociación con la empresa demandante y contestó que ocurrió aproximadamente en junio del año 2016.

La declaración rendida por Ricardo Ávila Restrepo es concluyente para descartar la veracidad del contenido del instrumento cambiario, toda vez que revela importantes circunstancias que desvanecen puntos primordiales contenidos en la letra de cambio de cara al verdadero negocio jurídico causal, tales como el rol que cumplió en la negociación y la fecha en la cual se efectuó el endoso en propiedad, que no son coincidentes con la literalidad del título y resultan trascendentales para la credibilidad al contenido crediticio del mismo.

Llama la atención además que, una suma considerable de dinero se entregue en efectivo, conforme declaró el señor Ávila, quien afirmó: *"Yo se los entregué personalmente en el apartamento de él en los Balsos"*.

Del escenario probatorio acabado de resaltar emerge incertidumbre respecto de la realidad del negocio que subyace al título valor, pues se plantan serias dudas o contradicciones respecto del mismo y en aspectos puntuales de importancia como lo es la calidad de quien presuntamente fungió como acreedor de la suma de dinero o la fecha en la cual se materializó el endoso en propiedad.

Se suman otras circunstancias como la realización de un préstamo de dinero por una significativa suma de dinero entregada en efectivo, que no se allegaron soportes que respaldaran la existencia de una negociación real y que justifiquen la adquisición del título, labor fácil de emprender para la demandante por tratarse de una sociedad comercial a quien corresponde emitir facturas de venta y llevar contabilidad, de ahí que, no

pueda establecerse una justificación certera para la adquisición del título, máxime cuando la negociación resultaba significativa para la demandante por superar con creces el capital de la sociedad.

En ese orden de ideas, las pruebas valoradas en conjunto muestran dudas razonables que ponen en tela de juicio la existencia de una relación sustancial que sirviera de base a la letra de cambio, pues no puede pasarse desapercibida la versión discordante respecto de quien conforme a la letra era presuntamente el acreedor primigenio de la obligación y transfirió la propiedad del título por endoso, entre otros asuntos que no resultaron coincidentes con la literalidad del instrumento.

Bajo tal panorama, las pruebas enrostradas son determinantes para la prosperidad de las excepciones formuladas por la parte demandada, dado que no quedó claro el vínculo jurídico subyacente, se insiste, dada la información de aspectos relevantes que contrarían la versión fáctica expuesta en la demanda y el contenido plasmado en la letra de cambio, motivos por los cuales se deduce la inexigibilidad de la obligación contenida en el documento cartular que sirvió de base a la ejecución y necesariamente conlleva a la cesación de la ejecución, como lo concluyó el *a quo*.

Ahora bien, la ausencia de continuidad de la ejecución no implica aseverar que no exista una obligación económica entre las partes, la tesis que sostiene la Sala es que no es claro el negocio que originó la letra de cambio base de la demanda y tal defecto impide la continuidad del cobro ante la destrucción de la presunción de buena fe del tenedor ejecutante, por lo que la vía ejecutiva no es la idónea para su cobro, sin perjuicio de que la eventual obligación se pueda discutir y declarar mediante proceso declarativo.

En ese orden de ideas, la Sala estima que existen dudas razonables respecto de la veracidad del negocio que dio origen a la letra de cambio cuyo contenido crediticio se demandó por la vía ejecutiva, en consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia, pues la ejecución debe cesar.

Finalmente, en lo concerniente al reproche del apelante consistente en la necesidad de practicar una prueba de trazos y de validación de la caligrafía de Sergio Alejandro Arango mediante dictamen grafológico, estima la Sala que, eventualmente, podría asistirle razón, pues revisado el reverso del instrumento solamente podría tomarse como patrón la siguiente mención: "*Att. Sergio Alejandro A*", que correpondió a la firma del endoso en procuración, sin que sea dable atribuirle autoría a otra escritura contenida en la letra de cambio, caligrafía que se podría estimar insuficiente para determinar que fue dicha persona quien llenó

completamente el título valor, pues los únicos soportes manuscriturales analizados por el perito fueron los contenidos en la propia letra, es decir, que contrario a la aseveración del experto, el material indubitado fue evidentemente escaso. Sin embargo, no es relevante tal análisis, como quiera que, conforme la motivación ya expuesta, el análisis de los demás elementos probatorios disponibles en el proceso, permiten deducir con contundencia la falta de exigibilidad del título derivada de dudas razonables sobre la correspondencia de la letra de cambio objeto de cobro con un negocio causal real y subyacente, lo cual impone la cesación de la ejecución, sin perjuicio de la posibilidad de demostrar la existencia de la obligación en un proceso declarativo.

En definitiva, la Sala estima la imposibilidad de considerar un negocio jurídico subyacente que justifique la ejecución de la letra de cambio que soporta la acción cambiaria, razón por la cual se impone la confirmación de la decisión de primer grado con imposición de costas en esta instancia en contra de la demandante apelante, de conformidad con los numerales 1 y 3 del artículo 365 del CGP.

6. SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN.

En el caso concreto, la sociedad demandante no es tenedora de buena fe exenta de culpa con ocasión de la falta de diligencia que mostró en la adquisición del título valor, por tanto, le son oponibles excepciones que versen sobre el negocio jurídico subyacente. Adicionalmente, la valoración conjunta de la prueba muestra dudas razonables en aspectos trascendentales que restan credibilidad al negocio causal de la letra de cambio objeto de cobro, lo que impone la cesación de la ejecución, sin embargo, ello no resta la posibilidad de debatir la existencia de la obligación en un proceso declarativo.

La ausencia de verificación de los trazos de Sergio Alejandro Arango en la prueba grafológica no tiene la virtualidad de derruir la decisión de primera instancia, por cuanto, el material probatorio restante tiene la contundencia suficiente para desestimar la continuidad de la ejecución. Razones por las cuales se confirmará la decisión de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN SALA PRIMERA DE DECISIÓN CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley;

7. RESUELVE.

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 19 de agosto de 2020 dentro del asunto de la referencia, por las razones expuestas.


SEGUNDO: CONDENAR en costas en esta instancia a la demandante, fijando como agencias en derecho en esta sede la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

TERCERO: ORDENAR la devolución del expediente al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE



SERGIO RAÚL CARDOSO GONZÁLEZ
Magistrado



MARTÍN AGUDELO RAMÍREZ
Magistrado

(En ausencia justificada)
JOSÉ OMAR BOHÓRQUEZ VIDUEÑAS
Magistrado